



La explosión social del campo frente a latifundistas, multinacionales y Unión Europea

Las manifestaciones de este domingo 16 de febrero en las principales ciudades de León, convocadas por UGT y CCOO contra las consecuencias del cierre de las minas y exigiendo un plan de reindustrialización son una expresión aguda de la crisis que atraviesa hoy prácticamente todos los sectores productivos del país. No es una particularidad española, incluso un famoso economista tan acérrimo defensor del capitalismo como Paul Krugman declaraba recientemente que las economías europeas están a nivel financiero peor que en 2007. En efecto, no hay que ser muy inteligente para comprender que la causa es el propio sistema de producción capitalista embarcado en una nueva guerra comercial, donde los monopolios, las multinacionales y los trust están dispuestos a todo para sobrevivir, arrastrando a los estados y empujando a todos los gobiernos a arrasar con todas las conquistas sociales y democráticas. Es en este marco que debemos integrar la respuesta, la revuelta de los pueblos, de norte a sur, de este a oeste, con los trabajadores y la juventud a la cabeza.

En esta situación la crisis en el campo toma formas particulares. Si las movilizaciones de León intentan ser derivadas por algunos hacia una salida «cantonalista» que algunos caracterizan como el ejercicio del derecho a decidir, lo que confirma es que el “Estado de las autonomías” hace aguas, porque su continuidad franquista, al servicio exclusivo del gran capital, hunde a este país, sus gentes y sus pueblos en un naufragio continuado.

Y plantea evidentemente a los trabajadores y organizaciones exigencias superiores a los simples reclamos, plantea el problema de reordenar la sociedad bajo nuevos parámetros.

Los agricultores en lucha

Desde finales de enero en movilizaciones organizadas en distintos puntos del país, las principales organizaciones de agricultores y ganaderos (Asaja, Coag, Upa y después la Unión de Pagesos) han planteado las reivindicaciones acuciantes de los agricultores que conciernen par-

ticularmente a los pequeños y medianos propietarios. Hay una base clara para la indignación de los agricultores: en los últimos 10 años la renta agraria ha disminuido un 23 por ciento. Decenas de miles de agricultores trabajan a pérdida o simplemente sobreviven al borde de la ruina. Desde la entrada en la UE, la población activa agraria ha bajado casi la mitad, del 10% a menos de un 6%.

Paralelamente la Unión Europea que está debatiendo sobre su presupuesto plurianual anuncia una reducción del presupuesto de la PAC (Política Agraria Común) del 13,9 por ciento. La renta agraria en nuestro país está cubierta en un 30 por cien con los fondos de la PAC. La PAC, que en su inicio buscaba promover la producción subvencionándola, cambió sus criterios en los años 2000 pasando a subvencionar la superficie de las explotaciones. Quiere esto decir que en estos momentos son los grandes latifundistas los que son subvencionados. Muchos de ellos ni siquiera participan en la producción y son auténticos “agricultores de salón» (o sea, los Domecq, Alba, Mora Figueroa..., también se benefician de la PAC las grandes distribuidoras, los fondos de inversión, ...). El 75 por cien de los agricultores no reciben más de 5.000 euros al año. La PAC, de hecho, impulsa la concentración de la propiedad de la tierra. Hoy la gran propiedad, el latifundio es mayor que en los años 30. Y hay que tener en cuenta que, a partir de la entrada en la UE, la PAC es la única política agraria, porque los gobiernos han cedido a las instituciones de Bruselas toda soberanía en este terreno, como en tantos otros.

¿Qué busca la Unión Europea? Sobre el papel, su objetivo es distribuir productos baratos a nivel europeo, aunque sea a costa del campesinado. Incluso con acuerdos de libre comercio” con terceros países que producen a más bajos precios, una producción controlada también por los grandes monopolios. Pero estos productos, en contra de lo prometido, no llegan a precios baratos a la población trabajadora de Europa. Pues las cadenas de distribución y la agroindustria sacan a veces el 500 por

cient del beneficio. Esto ocurre en España y en Europa, pues nuestro país es un exportador neto. Una vez más, la política de la UE se pone en evidencia.

¿Qué piden los agricultores?

Simplemente, unos ingresos dignos. Han visto que todos los productos: tractores, semillas, fertilizantes, energía... han subido, mientras que los precios de venta de sus productos bajan. Y sin embargo los precios de venta al consumidor han subido también. Cuestión que no puede eludirse con la «venta directa» a la cual se han lanzado una minoría. A gran escala, el precio está fijado por los monopolios y pocos pueden escapar a ello.

La ley de la Cadena Alimentaria de 2013 de hecho mantenía el circuito de distribución dominado por las multinacionales de la distribución y transformación.

Las organizaciones convocantes de las movilizaciones, organizando sobre todo a los pequeños propietarios agrícolas, han mostrado su independencia de las organizaciones políticas. Así en la concentración en las Cortes el lunes 10 de febrero expulsaron a los representantes de VOX que pretendía manipular la movilización.

Cómo ha reaccionado el Gobierno

La primera reacción del gobierno “progresista” ha sido enviar a su policía a apalea a los agricultores. Después, el ministro Planas ha intentado primero negociar con las organizaciones medidas paliativas, disminución de las cotizaciones, discusión con las grandes distribuidoras para ajustar los precios, buscar subvenciones al combustible. Por el momento, ninguna medida de fondo. Y si se trata de rebajar las cotizaciones sociales en el campo, habrá que ver si eso repercute en menores pensiones futuras para los jornaleros agrarios o en menores ingresos para la Seguridad Social, que no le sobran.

Es más, la ministra de Trabajo y el vicepresidente se reunieron antes con los sindicatos de jornaleros para modificar el PER (reducir de 33 a 20 las peonadas para cobrar el subsidio) y aumentar los controles de inspectores de trabajo. En efecto decenas de miles de jornaleros,

muchos de ellos emigrantes, trabajan sin contrato ni protección.

De hecho, portavoces oficiosos del gobierno como el «liberal» *El País* decían que el problema se resolvería «aumentando el tamaño de las explotaciones para ganar en competitividad» (*El País* 3 de febrero), o sea, acabar con los pequeños campesinos.

Es evidente que ninguna medida paliativa puede responder verdaderamente

a las reivindicaciones de los agricultores. Sólo atacando a las redes de distribución oligopólicas, planteando su control e incluso su nacionalización, dotando de recursos a los agricultores sería posible una respuesta positiva. La reforma agraria moderna es abiertamente anticapitalista, contra la gran propiedad que se confunde con los monopolios de distribución y los fondos de inversión y contra la política de la Unión Europea. Todo ello asegurando

a los jornaleros salarios acordes (contra la demagogia del supuesto impacto negativo del aumento del SMI que no afecta ni al 1% del precio del producto). También a los sobreexplotados trabajadores de la industria agroalimentaria.

Como en todas las cuestiones la pelota está en el campo del Gobierno, pero también de las organizaciones sindicales, que deben impulsar la movilización hasta el logro de las reivindicaciones.

La campaña electoral en Estados Unidos

La absolución por el Senado del presidente estadounidense ya se esperaba. Pero, si indudablemente es un resultado que refuerza su posición, para nada resuelve la crisis que sacude a las altas instancias del aparato republicano. Mitt Romney, único senador republicano que ha votado en contra de su absolución (y ello sólo respecto de uno de los cargos), es el representante de una importante corriente del Partido Republicano, heredero de toda la tradición republicana.

Apenas votada su absolución, Trump ha escrito un *tweet* felicitando su ministro de Justicia por su intervención en un asunto judicial relativo a uno de sus antiguos asociados; inmediatamente, el ministro se ha visto obligado a tomar sus distancias, negando cualquier intervención y pidiendo a Trump que deje de comentar casos abiertos. Todo el aparato del Estado estadounidense está impactado por la manera en que Trump ejerce su presidencia, manera que es indisoluble de su programa de ataque frontal y abierto contra todos los impedimentos al dominio exclusivo del imperialismo estadounidense.

En cuanto al Partido Demócrata, las primarias de Iowa, y después de la New Hampshire, han barajado enormemente las cartas. Lo que se había anunciado era una batalla entre Biden, candidato del aparato, Sanders, con su programa que se reclama del socialismo, y Warren, candidato diseñado para competir con Sanders teniendo buen cuidado de no atacar el sistema político estadounidense. La campaña de Biden se derrumba: ha obtenido menos

del 10% de los votos en New Hampshire. Warren no despierta ilusiones y es ampliamente superado por Sanders. El principal competidor de Sanders en esta fase es Pete Buttigieg, alcalde de una ciudad media, cuyo programa sigue el surco marcado por Biden. Al acecho, Michael Bloomberg, multimillonario, propietario de una empresa de comunicación y antiguo alcalde (republicano) de Nueva York, cuenta con el derribo de Buttigieg en las próximas primarias, en las que ha carecido de medios financieros para la campaña, para ocupar el lugar de principal competidor de Sanders. Un editorialista del *Washington Post* previene, el 15 de febrero, del riesgo de que ningún candidato se haga claramente con la mayoría: «*Demócratas, tengo una buena noticia para vosotros. El día de las elecciones nadie recordará el desbarajuste llamado caucus de Iowa* (en el que la centralización de los resultados se retrasó por problemas técnicos, aplazando tres días su proclamación). *El problema es que el olvido se deberá a que lo habrá borrado la catástrofe mucho mayor que se perfila para julio* (momento en el que el Partido Demócrata elegirá su candidato).»

En este caos, y pese a unos resultados más bajos a los obtenidos hace cuatro años, Sanders ocupa el lugar central, y quizá más que él, su programa: un salario mínimo de 15 dólares la hora, una enseñanza superior gratuita, una verdadera seguridad social sin aseguradoras privadas.

El lugar que toma en estas primarias es el reflejo de las numerosas luchas que libra la clase obrera estadounidense. En 2019,

por primera vez en quince años, el número de días de huelga en Estados Unidos ha superado los tres millones. En el centro de esas huelgas, las cuestiones salariales, en un país donde una camarera puede tener un salario de 9 dólares por setenta horas de trabajo, porque el salario mínimo no se aplica en los empleos de servicio, entendiendo que las propinas constituyen el salario. En un país en el que la protección sanitaria está enteramente en manos de aseguradoras privadas, los huelguistas también reivindican su mejora y plantean más o menos explícitamente la cuestión de que un sistema público nacional se haga cargo de la sanidad. Las huelgas en la enseñanza plantean, además de esas cuestiones, las de la privatización de la enseñanza y la destrucción de todo el tejido social que la acompaña. Los sondeos indican que Sanders es el candidato demócrata que obtendría mejores resultados frente a Trump, mostrando que muchos electores se abstendrán (o incluso votarán a Trump) antes que votar por un candidato demócrata que encarna la continuidad con los mandatos de Clinton y Obama. Millones de trabajadores se disponen a votar por Sanders en las primarias y en las presidenciales si es designado candidato por el Partido Demócrata. Millones se abstendrán también, convencidos de que estas elecciones no cambiarán su día a día. En este contexto de caos en las direcciones, sólo una cosa es cierta, y es que la clase obrera estadounidense sigue planteando todas las reivindicaciones.

Devan Sohier



Campaña de extensión y suscripciones a esta *Carta Semanal*

Si no la recibes, te invitamos a que la recibas cada semana. Si la recibes, te proponemos que suscribas a otros compañeras y compañeros a los que pueda interesar.

La elaboración y envío de esta Carta conlleva algunos gastos. El POSI, que la edita, no tiene ni quiere subvenciones, toda su actividad y sus publicaciones son financiadas exclusivamente por trabajadoras y trabajadores, que quieren apoyar, en este caso, la publicación de la *Carta Semanal*. Pedimos un apoyo de 5 EUROS al año, o más si os parece.

Puedes apuntarte para recibirla:

- Enviando un correo electrónico a inforposi@gmail.com
- En nuestra Web: <http://cartas.posicuarta.org>

Nuestra cuenta corriente en La Caixa es: 2100 2812 51 0200071314. Indicando: Apoyo Carta Semanal



Partido Obrero Socialista Internacionalista
Sección en España de la IV Internacional

Calle Desengaño, 12 (1º 3A). 28004 - Madrid
Teléfono: 91 522 23 56 - Fax: 91 521 72 01
<http://www.posicuarta.org>
Búscanos en Twitter: @posicuarta